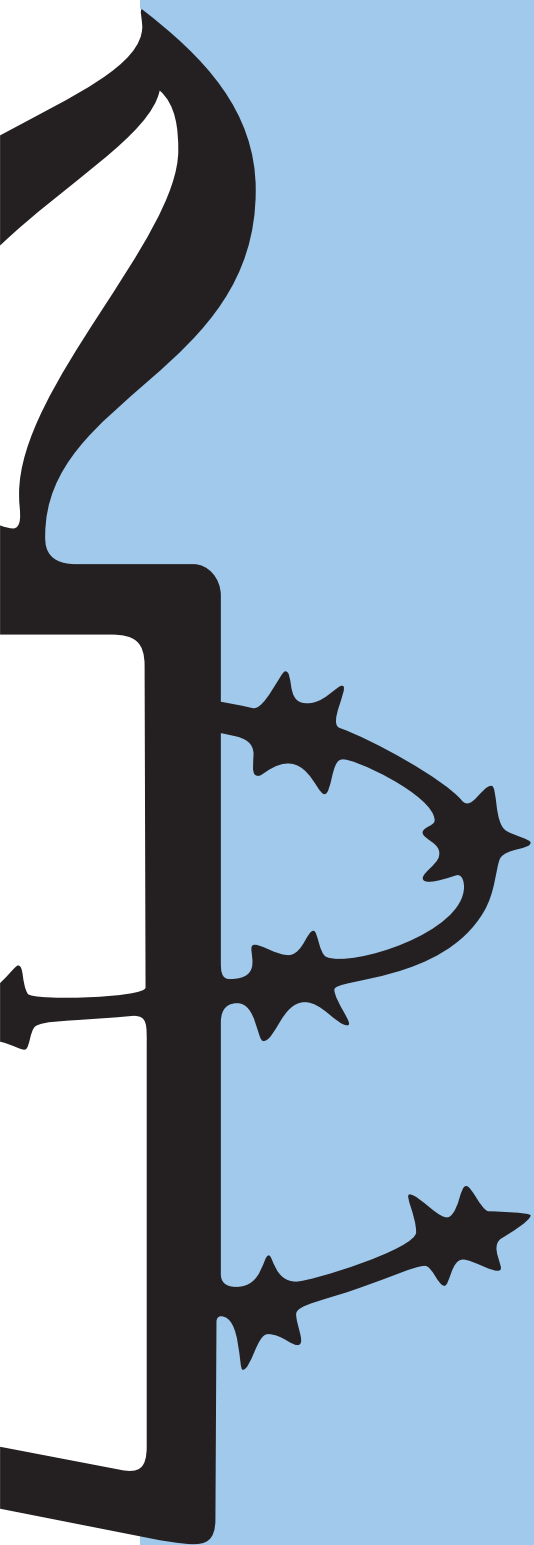


AMNISTÍA INTERNACIONAL



Argentina: Elecciones 2007

Llamamiento de Amnistía Internacional para la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos

Argentina: Elecciones 2007

Llamamiento de Amnistía Internacional para la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos

En el marco de las elecciones presidenciales y legislativas para el período 2007-2011 que se celebrarán el próximo 28 de octubre en Argentina, Amnistía Internacional se dirige a todas las candidatas y todos los candidatos para presentar sus preocupaciones y recomendaciones, y que éstas contribuyan a la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional basa su labor en normas internacionales de derechos humanos, proclamadas por la Comunidad Internacional a través de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales; normas que los Estados se han comprometido a respetar. Es por esta razón que la organización se dirige a los Gobiernos, motivada por la obligación específica que éstos han contraído, en el plano internacional, de asegurar que los agentes del Estado actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos fundamentales.

Argentina es parte de importantes Tratados Internacionales y, en este sentido, Amnistía Internacional desea enfatizar que la firma y ratificación de esos Tratados debe ser equiparada con la voluntad política que promueva, defienda e implemente medidas que hagan realidad la protección de los derechos humanos. La sola firma no es suficiente.

Amnistía Internacional realiza un llamamiento con relación a ciertas preocupaciones enmarcadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, resalta que, en razón de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, las próximas políticas que se consideren en el período 2007-2011 deben propender a la efectividad del derecho al trabajo, a un nivel de vida apropiado, a la salud, a la educación y a la alimentación, entre otros. Para esto, es necesario que se concrete el cumplimiento de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador.

Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales no son una cuestión de recursos inadecuados, si no de políticas. El Estado es el primer responsable de hacer de los derechos humanos una realidad, de respetarlos y no violarlos. Debe proteger esos derechos, garantizando que otras personas u organismos del Estado no cometan abusos contra ellos. Y debe satisfacerlos haciéndolos realidad en la práctica.

Se encuentra en las manos de la próxima presidenta o del próximo presidente, así como de las próximas autoridades electas, la oportunidad histórica de trasladar los compromisos asumidos en materia de derechos humanos a la vida cotidiana de las mujeres y los hombres que habitan la República Argentina.

Amnistía Internacional insta a las candidatas y los candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas de 28 de octubre de 2007 para que en el próximo período de Gobierno se reconozca la indivisibilidad de los derechos humanos y se comprometan, como mínimo, a:

- Crear un Plan Nacional de Derechos Humanos para impulsar y mejorar la promoción y protección de los mismos.
- Promover los derechos económicos, sociales y culturales.
- Reconocer el principio de igualdad ante la ley de todos los habitantes de Argentina tomando medidas concretas contra la discriminación.
- Promover las investigaciones prontas, independientes e imparciales por la justicia ordinaria de las denuncias de violaciones contra los derechos humanos fundamentales.
- Proteger y promover públicamente la labor de los defensores de los derechos humanos, incluyendo el respaldo público a la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades

fundamentales universalmente reconocidas, conocida como la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, adoptada el 9 de diciembre de 1998.

- Reafirmar el compromiso de acción efectiva para erradicar la tortura y los malos tratos, asegurando que las denuncias de esta violación de los derechos humanos sean exhaustiva e independientemente investigadas y que los hallados responsables sean llevados a juicio ante la justicia ordinaria.

- Adoptar medidas para consolidar la abolición de la pena de muerte en Argentina.

- Asegurar el cumplimiento de los compromisos contraídos respecto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.

- Asegurar el cumplimiento con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

- Asegurar el cumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, que protege el derecho de los pueblos originarios.

En ese marco, el Plan Nacional de Derechos Humanos que deberá ser creado por la nueva administración de gobierno deberá comprender políticas concretas, al menos, en los siguientes seis puntos para poner fin a violaciones de derechos humanos de vieja data:

- Actuar firmemente para erradicar la violencia contra la mujer.

- Promover y proteger efectivamente los derechos de los pueblos originarios.

- Luchar contra la impunidad.

- Erradicar la tortura y los malos tratos.

- Promover y tomar los pasos necesarios que lleven a la abolición definitiva de la pena de muerte del ordenamiento jurídico argentino.

- Mantener políticas de apoyo para la realización y ratificación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.



+ Actuar firmemente para la erradicación de la violencia contra la mujer

La violencia contra las mujeres es probablemente la violación de los derechos humanos más habitual y recurrente. No conoce fronteras, ni geografía, ni cultura o clase social. Millones de mujeres en el mundo son humilladas, golpeadas, violadas, asesinadas, por la simple razón de ser mujeres, dejando en evidencia la discriminación de género y una relación hombre/mujer desigual. Es tarea del Estado tomar las medidas necesarias para prevenir y sancionar las violaciones cometidas en el país en ese sentido.

La violencia contra las mujeres está presente en todas las sociedades del mundo, sea cual sea su sistema político o económico. Este escándalo cotidiano se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios, pero tiene una raíz única: la discriminación universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. La situación de violencia se une a otras situaciones de marginalidad y discriminación, como la pobreza, la etnia, el desempleo y, en muchos casos, costumbres religiosas o sociales, que aumentan la dificultad de las mujeres para acceder a buscar ayuda.

Solamente en la provincia de Buenos Aires, en el primer semestre de 2007, hubo 18.000 denuncias de violencia familiar en las Comisarías de la Mujer y Familia; y en el primer trimestre de 2007, en los tribunales civiles con competencia de la Ciudad de Buenos Aires, hubo 1.011 denuncias de violencia doméstica. Estos datos evidencian que el Estado argentino debe actuar de inmediato para hacer frente a este tipo de violencia, impedir su repetición, tomar medidas destinadas a erradicarla por completo y alcanzar cambios concretos para transformar la vida de las mujeres. Argentina ha ratificado diferentes instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por el país el 6 de octubre de 1994, en el que se define la violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". Argentina ratificó el 5 de julio de 1996 el Protocolo de la Convención sobre Todas las

Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), convertido en ley nacional N° 24.632 y efectivizada en noviembre de 2006. Esta Convención marca los lineamientos fundamentales para el diseño, implementación, coordinación, y seguimiento de las políticas públicas a desarrollar en materia de violencia contra las mujeres.

Existe legislación nacional como la Ley de Protección contra la Violencia Familiar (la N° 24.417 a nivel nacional) de 1994 y numerosas leyes provinciales.

Las garantías legales existen, ahora, hay que cumplirlas y hacerlas efectivas.

Amnistía Internacional insta a las candidatas y a los candidatos que concurren a las elecciones presidenciales y legislativas a comprometerse a:

- Desarrollar un Programa Nacional Único de lucha contra la Violencia hacia la Mujer que contemple los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, y que coordine todas las políticas públicas del país, asegurando la unificación de criterios a nivel nacional y garantice el acceso a la justicia.
- Implementar un Sistema Estadístico Nacional para que la "invisibilidad" de la violencia contra la mujer termine y existan datos concretos que sirvan de base objetiva a las políticas y programas futuros.
- Promover una Ley Integral de Género clara y precisa sobre la responsabilidad y obligaciones de las autoridades para eliminar la discriminación de género, con planes de acción concretos, lapsos de cumplimiento y asignación presupuestaria acorde.

+ Promover y proteger efectivamente los derechos de los pueblos originarios

Todos y cada uno de los habitantes del mundo tienen, sin ningún tipo de distinción, los mismos derechos. Obviamente, los pueblos originarios, o pueblos indígenas, no están al margen de ello y el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada en septiembre pasado en las Naciones Unidas, con el voto positivo de la República Argentina y de la mayoría de los países miembro de la ONU. Además de la adopción de ese importante compromiso e instrumento internacional, Argentina está obligada a garantizar y velar por el irrestricto respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en virtud de la Constitución Nacional y de otros instrumentos internacionales de los que ya es parte: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1966), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), el Pacto de San José de Costa Rica (1969), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985) y la Ley Nacional 23.302 de Protección de las Comunidades Aborígenes, entre otros.

El Estado argentino tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todos y cada uno de sus ciudadanas y ciudadanos, en su sentido más amplio, por medio de estructuras administrativas y de gestión destinadas a prestar especial atención a estas poblaciones originarias que se encuentran especialmente afectadas en el acceso a la salud, a la alimentación, al agua, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo, a la inclusión social y a su bienestar en general. El Defensor del Pueblo de la Nación, en su demanda D.587.XLIII contra el Estado Nacional y Provincia de Chaco, señala que hay que poner fin al “exterminio silencioso” contra los pueblos originarios.

En el informe anual 2007 de Amnistía Internacional, se denuncia que comunidades indígenas de las provincias de Chaco y Salta, incluidos los grupos toba, wichi y mocovi, llevaron a cabo huelgas de hambre e instalaron campamentos al borde de carreteras con el propósito de solicitar un presupuesto razonable para el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), la adopción de medidas relativas a la vivienda y la salud, y el fin de la venta y distribución irregulares de tierras de propiedad estatal (tierras fiscales) a empresas madereras y productores de soja. En agosto de ese mismo año, miembros de la comunidad wichi de la provincia de Salta, realizaron una acción similar para reclamar la devolución de tierras comunales.

Amnistía Internacional insta a las candidatas y a los candidatos que concurren a las elecciones presidenciales y legislativas a comprometerse a:

- Sancionar, por parte de la República Argentina, leyes en consonancia con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y adoptar medidas efectivas e inmediatas para mejorar las actuales condiciones de vida de los pueblos originarios, garantizándoles el efectivo y real ejercicio de sus derechos esenciales tales como, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo, a la inclusión social, y al bienestar general, entre otros.

+ Luchar contra la impunidad

Las cuestiones relacionadas con la justicia, las reparaciones y el conocimiento de la verdad deben ocupar un lugar destacado entre los objetivos de una sociedad. Si bien se reconoce que ha habido importantes avances en este sentido, ya que se ha dado la continuación y culminación de los juicios iniciados -aspecto vital para la lucha contra la impunidad-, las investigaciones y los enjuiciamientos derivados de ellas deben continuarse para encontrar la verdad y la justicia.

El Informe Anual 2007 de Amnistía Internacional denuncia que en Argentina se registraron ataques y amenazas contra personas que participaron en juicios de ex miembros de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional considera que la protección de la seguridad de las víctimas, testigos y sus familiares constituye un aspecto fundamental del debido proceso reconocido en la Constitución Nacional de la República Argentina. En consecuencia, las autoridades deben garantizar que las víctimas, testigos y sus familiares involucrados en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos sean protegidos de cualquier amenaza, represalia o daño contra sus personas.

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985) establece en sus artículos 4 y 6 que “las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional” y “se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia”.

Argentina cuenta con la lamentable desaparición, el 18 de septiembre de 2006, de Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio contra Miguel Etchecolatz -ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, declarado culpable de asesinato, tortura y secuestros durante la dictadura militar-. Éste es un caso paradigmático que muestra la necesidad de proteger a los testigos y sus familiares durante los procesos judiciales.

Amnistía Internacional insta a las candidatas y a los candidatos que concurren a las elecciones presidenciales y legislativas a comprometerse a:

- Implementar un Programa Nacional de Protección de Testigos, Familiares y Víctimas de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos y dotarle de recursos suficientes para su correcto y efectivo funcionamiento.
- Investigar las desapariciones y amenazas contra víctimas, testigos y familiares de los procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos; y dar a conocer públicamente la investigación y sus resultados.

+ Erradicar la tortura y los malos tratos

Existe una demora de la justicia en la investigación de las denuncias por actos violentos por parte de la policía y fuerzas de seguridad, así como por el maltrato de detenidos. Amnistía Internacional considera que un Plan Nacional de Derechos Humanos debe afirmar la acción efectiva por parte del Estado en investigar, prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos.

Desde 1987, Argentina es Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que "quedan abolidos para siempre (...) toda especie de tormento y los azotes"; sin embargo, Amnistía Internacional considera que esta prohibición no cumple adecuadamente los requisitos del artículo 1 de la Convención contra la Tortura, por lo que deben tomarse medidas adecuadas para que la prohibición sobre la tortura y los malos tratos quede claramente estipulada en la legislación nacional.

En 2005 Amnistía Internacional publicó un informe en el que se detallan las recomendaciones efectuadas a la Argentina por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. Amnistía Internacional solicita que se cumplan dichas recomendaciones por parte del Estado tanto a nivel nacional como provincial.

En este marco, un tema que adquiere especial relevancia es el de las condiciones de los centros de detención. Del 22 de septiembre al 2 de octubre de 2003, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó visitas a distintos centros de detención en Argentina. Los expertos comprobaron "el hacinamiento y las malas condiciones de seguridad, salud, nutrición, vestimenta y sanitarias en la mayoría de los centros de detención visitados".

En mayo de 2005, Argentina acordó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Acta de Asunción de Paraguay a fin de tomar medidas urgentes para mejorar la situación carcelaria en Mendoza. El Informe Anual 2006 de Amnistía Internacional denuncia que las condiciones de reclusión siguen siendo duras y por ende violatorias de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

En el mes de mayo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público de Defensa de la República Argentina

suscribieron un Convenio de Cooperación Institucional, en pos de organizar y desarrollar un evento regional sobre "las buenas prácticas penitenciarias".

Amnistía Internacional celebra la realización de dicho Convenio, pero no puede dejar de advertir los pasos que aún quedan por dar para lograr políticas carcelarias, que observen y resguarden sistemáticamente los derechos humanos de los reclusos.

En razón de esto, Amnistía Internacional recomienda la elaboración de un Plan de Política Penitenciaria que contenga entre otros puntos:

- La erradicación de trato cruel, inhumano y degradante.
- La implementación de medidas para poner fin al hacinamiento.
- La separación de categoría de presos.
- Las investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las muertes de internos y sobre las denuncias de malos tratos.
- La puesta en marcha de un programa de asistencia médica y mejoramiento de las condiciones de higiene.
- El apoyo y protección de las organizaciones de la sociedad civil y abogados defensores de derechos humanos que trabajan sobre los derechos de los internos.
- La mejora de la situación penitenciaria.

Amnistía Internacional insta a las candidatas y a los candidatos que concurren a las elecciones presidenciales y legislativas a comprometerse a:

- Elaborar e implementar un Plan de Política Penitenciaria, que incluya en la práctica el contenido anteriormente señalado.
- Cumplir las obligaciones internacionales de la República Argentina contraídas por la adopción de instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos y el Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

+ Promover y tomar los pasos necesarios que lleven a la abolición definitiva de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico argentino

La pena de muerte constituye, en todas las circunstancias, la máxima violación al derecho a la vida y el castigo más extremo, más cruel, inhumano y degradante. Amnistía Internacional trabaja en favor de la abolición de la pena de muerte y la suspensión de su uso.

En materia de pena de muerte, Argentina es abolicionista sólo para delitos comunes, conservando la pena capital para los delitos militares contemplados en el Código de Justicia Militar.

El 12 de diciembre de 2006, Argentina firmó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, pero todavía no lo ha ratificado. El 20 de diciembre de ese mismo año, firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, que establece la abolición total de la pena de muerte, pero permite a los Estados Partes mantenerla en tiempo de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el Protocolo o adherirse a él, pero Argentina tampoco lo ha ratificado aún.

Argentina debe adoptar medidas para consolidar la abolición de la pena de muerte, eliminándola del Código de Justicia Militar y alcanzar, así, la erradicación total de dicha pena en el país.

Amnistía Internacional insta a las candidatas y a los candidatos que concurren a las elecciones presidenciales y legislativas a comprometerse a:

- Eliminar de forma definitiva de la pena de muerte del ordenamiento jurídico argentino, a través de su derogación en el Código de Justicia Militar
- Ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la abolición de la pena de muerte, sin reserva alguna, en consonancia con el proceso iniciado a través de la firma de estos instrumentos internacionales.



+ Mantener políticas de apoyo para la realización y ratificación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas

La propagación indiscriminada de armas hace peligrar el respeto a los derechos humanos directa e indirectamente; acentuando los conflictos de violencia armada y agudizando los niveles de subdesarrollo en el mundo.

Actualmente, 640 millones de armas circulan por el mundo. Cada año se fabrican 8 millones más, junto a 16.000 millones de balas: 2 por cada hombre, mujer, niña o niño del planeta. La falta de control en el comercio de armas hace que éstas viajen con demasiada facilidad y lleguen a manos de grupos y personas que las utilizan para violar los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.

Las armas ligeras contribuyen de forma significativa a la pobreza y al sufrimiento. Se infligen más heridas, muertos, desplazamientos, violaciones, raptos y torturas con armas ligeras que con cualquier otro tipo de armas. Por este motivo, Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU, las calificó como "las auténticas armas de destrucción masiva".

Desde 2003 Amnistía Internacional trabaja en la campaña Armas Bajo Control en pos de conseguir un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que mejore la seguridad de las personas, resguardando el propio derecho a la vida. El 26 de septiembre de 2006, 153 países votaron en las Naciones Unidas a favor de iniciar el trabajo para elaborar un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. El tratado debe abarcar todos los tipos de armas convencionales y también todos los tipos de transacciones, incluidas las ventas, préstamos, donaciones, importaciones y exportaciones de armas.

En lo que va de este año, Argentina ha dado respuesta positiva a la consulta del Secretario General de la ONU, en cuanto a la viabilidad, alcance y criterios para crear una norma que regule de manera eficiente las operaciones comerciales de armas que involucren a los gobiernos.

Una Consulta Popular realizada por Amnistía Internacional a lo largo de 2007 en

Argentina sobre esta temática arroja que más del 90% de los participantes opina que "se debe poner un límite a la proliferación indiscriminada de armas". Asimismo, señala que "la sanción de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas es fundamental para impedir que las mismas sean usadas para violar los derechos humanos" y cree que "es muy importante que el gobierno argentino tenga una participación activa y de apoyo durante el proceso de discusión" (AIAR: CAM 01/07/2007).

Argentina es miembro del grupo de siete países que lideran el proceso desde sus comienzos y debe seguir apoyando y participando en las próximas discusiones, asegurando que el respeto a los derechos humanos forme parte del texto final del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.

Amnistía Internacional insta a las candidatas y a los candidatos que concurren a las elecciones presidenciales y legislativas a comprometerse a:

- A apoyar y participar en las discusiones que definan la concreción de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que asegure el respeto a los derechos humanos.
- Ratificar el Tratado resultante por parte del Estado Argentino.

Actuar firmemente para erradicar la violencia contra la mujer; promover y proteger efectivamente los derechos de los pueblos originarios; luchar contra la impunidad; erradicar la tortura y los malos tratos; promover y tomar los pasos necesarios que lleven a la abolición definitiva de la pena de muerte del ordenamiento jurídico argentino, y mantener políticas de apoyo para la realización y ratificación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas son seis temas concretos que Amnistía Internacional estima urgentes y que deben formar parte de un Plan Nacional de Derechos Humanos. El reto, ahora, está en manos de quienes se postulan a las próximas elecciones.

La candidata o el candidato que resulte elegida o elegido para la Presidencia de la República Argentina, así como las próximas legisladoras y los próximos legisladores, deberán tomar medidas concretas para la protección y promoción de los derechos de todos los habitantes del país.

Argentina debe condenar sin ambigüedades las violaciones de los derechos humanos y ubicarlos en el centro de sus políticas tanto nacionales como internacionales.

Amnistía Internacional hace un llamado a las candidatas y los candidatos en este proceso electoral y, en particular, a la candidata o al candidato que asumirá la Presidencia de la Nación para que en el próximo período de cuatro años, la defensa, respeto e indivisibilidad de los derechos humanos sean centrales en la elaboración, definición y ejecución de las futuras políticas nacionales e internacionales del gobierno argentino.

AMNISTÍA
INTERNACIONAL



